



Roj: **ATSJ M 38/2024 - ECLI:ES:TSJM:2024:38A**

Id Cendoj: **28079310012024200030**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **18/06/2024**

Nº de Recurso: **9/2024**

Nº de Resolución: **11/2024**

Procedimiento: **Ejecución laudo arbitral**

Ponente: **JOSE MANUEL SUAREZ ROBLEDANO**

Tipo de Resolución: **Auto**

### **Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid**

Domicilio: C/ General Castaños, 1 - 28004

Teléfono: 914934850,914934750

31001530

NIG: 28.079.00.2-2024/0021703

**Procedimiento ASUNTO CIVIL 9/2024**-Reconocimiento de Laudos o resoluciones arbitrales extranjeras  
2/2024

**Materia:**Arbitraje

**Demandante:**XO SHIPPING A/S.

PROCURADOR D./Dña. ADELA CANO LANTERO

**Demandado:**CEMCO CEMENT TRADING, S.L.

PROCURADOR D./Dña. SANTIAGO TESORERO DIAZ

### **A U T O N° 11/2024**

#### **ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA SALA**

D. JOSÉ MANUEL SUÁREZ ROBLEDANO

#### **ILMOS. SRES. MAGISTRADOS**

D. FRANCISCO JOSÉ GOYENA SALGADO

Dña. MARÍA PRADO MAGARIÑO

En Madrid, a 18 de junio de dos mil veinticuatro.



Visto ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Madrid, por el Ilmo. Sr. Presidente de la Sala e Ilmos. Sres. Magistrados, que figuran al margen, el presente procedimiento de SOLICITUD EXEQUATUR Núm. 2/2024 (ASUNTO CIVIL 9/2024).

## I.- ANTECEDENTES DE HECHO.

**PRIMERO.**-Ante esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal de Justicia de Madrid, se presentó por la procuradora D<sup>a</sup> ADELA CANO LANTERO, en nombre y representación de la mercantil XO SHIPPING S.A., asistida por el letrado D. Jaime Albors Cano, demanda de reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeras (EXEQUATUR), de fecha 27 de febrero de 2023, 18 de septiembre de 2023 y 30 de octubre de 2023 dictados por la árbitra única designada por ambas partes de mutuo acuerdo D<sup>a</sup> SARA GUILLINGHAM AUKNER, en Londres (Gran Bretaña), frente a la entidad CEMCO CEMENT TRADING S.L. con base en los hechos y fundamentos que estimó oportunos y solicitando se dicte resolución por la que se declare haber lugar al reconocimiento de efectos del laudo arbitral referido dictado por la árbitra única D<sup>a</sup> SARA GUILLINGHAM AUKNER.

**SEGUNDO.**-Registrada la demanda, se designó ponente, acordándose conferir traslado a la parte demandada de la demanda y documentos aportados, a fin de que en el plazo de treinta días se personara y formulara, en su caso, escrito de contestación.

Asimismo, se dio traslado de la demanda al Ministerio Fiscal, que hizo las alegaciones que estimó oportunas.

**TERCERO.**-Por Decreto de 20 de febrero de 2024 se confirió a la entidad demandada plazo para la contestación, habiéndose formulado oposición por la entidad demandada estimando que no existía acuerdo arbitral válido y vinculante, tratándose de Laudos contrarios al orden público.

**CUARTO.**-Por su parte, el Ministerio Fiscal presentó escrito en el que, con fecha 14 de mayo de 2024, estimó que se acordara el reconocimiento interesado.

**QUINTO.**-Cumplimentado los trámites preceptivos, se señaló para la deliberación y votación del asunto la audiencia del día 18 de junio de 2024.

Ha sido ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Manuel Suárez Robledano, que expresa el parecer unánime de la Sala.

## II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

**PRIMERO.**-Los laudos cuyo reconocimiento en nuestro país se interesa por la parte demandante, acordaban lo siguiente:

- 1º. El Laudo de 27-2-2023 por el que se declara la jurisdicción.
- 2º. El Laudo de 18-9-2023 por el que se decide sobre el fondo litigioso, y
- 3º. El Laudo de 30-10-2023 sobre costas.

La sede de **arbitraje** es Londres, Inglaterra.

**SEGUNDO.**-El examen de la petición deducida ante esta Sala por la parte demandante, requiere comprobar si resultan o no cumplidos los requisitos formales que exige el artículo IV del Convenio de Nueva York, de 10 de junio de 1958, sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales -aplicable por expresa referencia del art. 46.2 de la Ley de **Arbitraje**- que dispone que:



"1. Para obtener el reconocimiento y la ejecución previstos en el artículo anterior, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución deberá presentar, junto con la demanda:

- a) El original debidamente autenticado de la sentencia o una copia de ese original que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.
- b) El original del acuerdo a que se refiere el artículo II, o una copia que reúna las condiciones requeridas para su autenticidad.

2. Si esa sentencia o ese acuerdo no estuvieran en un idioma oficial del país en que se invoca la sentencia, la parte que pida el reconocimiento y la ejecución de esta última deberá presentar una traducción a ese idioma de dichos documentos. La traducción deberá ser certificada por un traductor oficial o un traductor jurado, o por un agente diplomático o consular".

También la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, 29/2015, de 30 de julio, en su artículo 54.4 a), exige que, en el proceso de exequátur, a la demanda se acompañe el original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizados o apostillados.

En el presente caso, se han cumplido los citados requisitos, como cabe comprobar en las actuaciones.

Por otra parte, el Artículo V del Convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales de 10 de junio de 1958 establece:

"1. Sólo se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, a instancia de la parte contra la cual es invocada, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución:

- a) Que las partes en el acuerdo a que se refiere el artículo II estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la Ley que les es aplicable o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la Ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la Ley del país en que se haya dictado la sentencia; o
- b) Que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de **arbitraje** o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa; o
- c) Que la sentencia se refiere a una diferencia no prevista en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria; no obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al **arbitraje** pueden separarse de las que no han sido sometidas al **arbitraje**, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las primeras; o
- d) Que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, que la constitución del Tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la Ley del país donde se ha efectuado el **arbitraje**; o
- e) Que la sentencia no es aún obligatoria para las partes o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que, o conforme a cuya Ley, ha sido dictada esa sentencia.

2. También se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente del país en que se pide el reconocimiento y la ejecución comprueba:

- a) Que, según la Ley de ese país, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de **arbitraje**, o
- b) Que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país".

**TERCERO.**-En relación a los dos supuestos que se acaban de citar, por los que se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución del laudo arbitral, cabe señalar dos consideraciones previas:

- a) El examen, por parte de esta Sala, de la cuestión litigiosa sometida al Tribunal arbitral, en la medida en que la misma dimana de un contrato entre las partes celebrado el 18-1-2022, mediante el que se procedió a la



celebración de un contrato de fletamento modelo GENCON DEL BUQUE " DIRECCION000 " MEDIANTE PÓLIZA DE FLETAMENTO referida POR VIAJE, en la que la empresa demandada de exequatur se comprometía frente a la acora a cargar a bordo de dicho buque una partida de 42.000 toneladas (+-10%) de escombros a granel con carga en Iskinderun (Turquía) y descarga en un puerto de Alejandría o Damietta", fijándose una cláusula arbitral (documento núm. 5 de la demanda), lo que determina que la cuestión es perfectamente arbitrable, conforme a la Ley de **Arbitraje** 60/2003, de 23 de diciembre (art. 2.1). La cláusula arbitral es clara:

"El presente Contrato de Fletamento se regirá e interpretará de conformidad con la legislación inglesa y cualquier controversia derivada del presente Contrato se someterá a **arbitraje** en Londres de conformidad con las Leyes de **Arbitraje** de 1950 y 1979 o cualquier modificación o nueva promulgación de las mismas que esté en vigor en ese momento. A menos que las partes acuerden un árbitro único, cada parte designará Un árbitro y los árbitros así designados nombrarán un tercer árbitro, la decisión del tribunal de tres hombres así constituido o de dos de ellos, será definitiva. Cuando una de las partes reciba la designación por escrito del árbitro de la otra parte, ésta nombrará a su árbitro en un plazo de catorce días, a falta de lo cual la decisión del árbitro único designado será definitiva. Para los litigios en los que el importe total reclamado por una de las partes no supere el importe indicado en el recuadro 25" el **arbitraje** se llevará a cabo de conformidad con el Procedimiento de escasa cuantía de la LMMA". Se añade en el Recap lo siguiente: "ARB/ GA [**Arbitraje**/Avería Gruesa] IN LONDON AS PER UK ARBITRATION PROCEDURE".

En consecuencia, el objeto de la diferencia es susceptible de solución por vía de **arbitraje**.

Así se determinó por la árbitro única inglesa en el previo **arbitraje** celebrado en Londres sin que se observe, en contra de lo sostenido por la demandada obstáculo alguno por inexistencia de convenio arbitral alegado en tanto que la suscripción de la póliza y del convenio se realizó a través del intermediario Marvel, que seguía instrucciones de la aquí demandada. La valoración ya efectuada en el primer Laudo cuyo reconocimiento u homologación se pretende (párrafos 106 a 108 del mismo) aparece contundente a estos efectos y se acepta por la Sala, de conformidad con el dictamen del Ministerio Fiscal emitido al efecto.

Además, a mayor abundamiento, no se admitió la apelación contra el primero de los Laudos dictados al haber sido interpuesta, pese a su notificación en regla, fuera de plazo, indicando la High Court of Justice (KING'S BENCH DIVISION COMMERCIAL COURT), al desestimar la solicitud presentada por CEMCO denegando la autorización para apelar y condenando en costas al demandante (Doc. núm. 8 y su traducción como Doc. núm. 8T), que **CEMCO se encontraba fuera de plazo para presentar cualquier impugnación o recurso contra el Primer Laudo (conforme al art. 70.3 LA) y no habiendo presentado solicitud alguna de prórroga del plazo.**

b) En cuanto a la relación del Laudo con el orden público español, sin perjuicio de lo que diremos más adelante, hay que recordar el concepto de dicha noción, que delimita la reciente doctrina del Tribunal Constitucional.

"El tribunal declara en la STC 46/2020 que "por orden público material se entiende el conjunto de principios jurídicos públicos, privados, políticos, morales y económicos, que son absolutamente obligatorios para la conservación de la sociedad en un pueblo y en una época determinada ( SSTC 15/1987, de 11 de febrero ; 116/1988, de 20 junio , y 54/1989, de 23 febrero ), y, desde el punto de vista procesal, el orden público se configura como el conjunto de formalidades y principios necesarios de nuestro ordenamiento jurídico procesal, y solo el **arbitraje** que contradiga alguno o algunos de tales principios podrá ser tachado de nulo por vulneración del orden público. Puede decirse que el orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente" (FJ 4). El tribunal llama la atención en esta sentencia sobre el riesgo de convertir la noción de orden público "en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral, desnaturalizando la institución arbitral y vulnerando al final la autonomía de la voluntad de las partes. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a **arbitraje**"(FJ 4)." ( STC 65/2021, de 15 de marzo). En este sentido, también la STC de la misma fecha 55/2021.

El examen de dicho principio por parte del órgano judicial, debe concentrarse, como señala la STC 17/2021, de 15 de febrero, entre otras, en "el análisis de los posibles errores procesales en que haya podido incurrir el proceso arbitral, referidos al cumplimiento de las garantías fundamentales, como lo son, por ejemplo, el derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, o cuando el laudo carezca de motivación, sea incongruente, infrinja normas legales imperativas o vulnere la intangibilidad de una resolución firme anterior".



c) Cuestión relevante, sin duda, relacionado con lo anterior y el orden público procesal, es la necesaria posibilidad de que la parte demandada pueda intervenir en el proceso, con efectiva contradicción y ejercicio de los medios de prueba que estime oportunos en defensa de sus intereses, lo que nos sitúa en el trámite del correcto emplazamiento para contestar a la demanda.

La importancia de dicho trámite ha sido destacada desde el principio de sus resoluciones por el Tribunal Constitucional.

Así, en su STC 81/1996, de 20 de mayo, señala: "*Desde las primeras Sentencias hemos afirmado que este derecho implica la posibilidad de un juicio contradictorio, cuyo soporte instrumental básico es el acto procesal de comunicación, pues sin un debido emplazamiento las partes no podrían comparecer en juicio ni defender sus posiciones; asimismo hemos reiterado que este precepto constitucional contiene un mandato implícito al legislador y al intérprete para promover la defensa procesal mediante la correspondiente contradicción, lo cual lleva a exigir en lo posible, el emplazamiento personal de los demandados, y que tal emplazamiento ha de ser realizado por el órgano judicial con todo cuidado, cumpliendo las normas procesales que regulan dicha actuación a fin de asegurar la efectividad real de la comunicación*" (STC 157/1987).

Alegada por la demandada, asimismo, la contrariedad al orden público de los Laudos en cuestión, al estimar que había indefensión derivada de su falta de presencia en los **arbitrajes** por no ser parte en el convenio arbitral, el rechazo de la anterior excepción sobre la ausencia alegada de convenio arbitral lleva, necesariamente, a rechazar también este motivo de oposición ya que la postura de ausencia en los dos Laudos posteriores fue voluntaria y, por lo tanto, ninguna indefensión se puede predicar de la misma.

**CUARTO.**-La aplicación de la anterior doctrina y consideraciones que hemos expuesto al caso presente, nos lleva a descartar, incluso desde una perspectiva de examen de oficio, que se hayan vulnerado derechos fundamentales, en orden al derecho de defensa, igualdad, bilateralidad, contradicción y prueba, de la demandada. Todo ello se verá a continuación.

**QUINTO.**-No hay razones para dudar de la correcta actuación del árbitro y de que las actuaciones realizadas con las partes y en particular con la parte demandada, han tenido lugar, lo que pone de relieve, otra vez, la ausencia de infracción del orden público procesal, pese a lo que se sostiene de contrario.

No tenemos por qué dudar de que el procedimiento arbitral, seguido ante la árbitro internacional de Londres, se ajustó a las garantías procesales básicas referidas, en materia, entre otras de comunicaciones, notificaciones y emplazamiento.

Procede, en consecuencia, estimar la demanda de exequatur formulada por la mercantil actora XO SHIPPING S.A. frente a la condenada en el **arbitraje** seguido en Londres, la entidad CEMCO CEMENT TRADING S.L.

**SEXTO.**-Concretamente, atendiendo a las alegaciones ante la Sala y a la amplia documentación aportada, procede señalar lo siguiente:

1. Como indica el Ministerio Fiscal en su dictamen, no se aprecia ninguno de los supuestos previstos en los apartados 1 y 2 del art. V del Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958, que posibilitarían la denegación del reconocimiento y de la ejecución de la resolución arbitral.

2. Concretamente, tales apartados se refieren a extremos que han sido plenamente respetados por el Laudo objeto de reconocimiento en este expediente sin que, por la entidad demandada de exequátur, que fue debidamente citada para comparecer en el mismo, se haya efectuado manifestación alguna que sea estimable por las razones que se exponen con anterioridad. No ha existido, en su consecuencia, objeción de género alguno o impedimento obstativo válidamente planteado ante la Sala para la estimación de la demanda inicial, sin que exista motivo alguno conocido para que, de oficio, se deniegue el otorgamiento del exequátur solicitado.

**SÉPTIMO.**-En materia de costas, conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer a la parte demandada las costas causadas en este procedimiento.

Vistos los artículos citados y de general y pertinente aplicación.



### III.-PARTE DISPOSITIVA.

**QUE DEBEMOS ESTIMAR Y ESTIMAMOS** la demanda formulada por la procuradora D<sup>a</sup> ADELA CANO LANTERO, en nombre y representación de la mercantil "XO SHIPPING S.A" procede en consecuencia otorgar el **EXECUATUR** de los Laudos arbitrales extranjeros de fechas 27-2-2023 por el que se declara la jurisdicción, de 18-9-2023 por el que se decide sobre el fondo litigioso, y de 30-10-2023 sobre costas, dictados por la árbitra única D<sup>a</sup> SARA GUILLINGHAN AUKNER en Londres (Gran Bretaña), en los términos que se establecen en los Laudos referidos.

Procede hacer expresa imposición de las costas causadas en el presente procedimiento a la parte demandada.

La presente resolución es firme y no cabe interponer recurso alguno frente a la misma.

Lo acuerdan, mandan y firman el Ilmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Sres. Magistrados que figuran al margen.

**DILIGENCIA.**-Seguidamente se cumple lo mandado. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ